

“desestimación presunta, por silencio administrativo, de la petición de responsabilidad patrimonial presentada ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de fecha 11 de febrero de 2003 (expediente BA-RP-03/08). Cuantía 3.076,71 euros”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

RESUELVE:

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia número 682, de 12 de septiembre de 2005, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1537/2003, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador de los Tribunales Sr. Leal López, en nombre y representación de la entidad mercantil “Chuchi Transportes, S.L.” contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de fecha 11 de febrero de 2003 (BA-RP-03/08), anulamos la misma por no ser ajustada a derecho y condenamos a la Administración Autónoma demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 3.076,71 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa. Sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas”.

Mérida, a 3 de noviembre de 2005.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia nº 103, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida, en el recurso contencioso-administrativo nº 25/2005.

En el Recurso Contencioso-Administrativo, núm. 25 de 2005, promovido por el recurrente D. CARMELO JURADO GÓMEZ, representado

por la Procuradora de los Tribunales Sra. SOLTERO GODOY, y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura defendida y representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos recurso que versa:

“Contra la desestimación presunta por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios ocasionados en una finca de su propiedad por las especies cinegéticas procedentes de la Reserva Nacional de Caza del Cijara, formulada el 8.4.2003 ante la referida Consejería”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por legislación vigente,

RESUELVE:

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia nº 103, de 4 de mayo de 2005, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida dictada en el recurso Contencioso-Administrativo nº 25/2005, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya parte dispositiva dice:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. CARMELO JURADO GÓMEZ, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. SOLTERO GODOY, contra la desestimación presunta por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios ocasionados en una finca de su propiedad por las especies cinegéticas procedentes de la Reserva Nacional de Caza del Cijara, formulada el 8.4.2003 ante la referida Consejería, ratificada con fecha 19.11.2004 por resolución del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por la que se deniega la indemnización solicitada, anulamos la misma por no ser ajustada a Derecho y condenamos a la Administración Autónoma demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 5.247 €. Sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas procesales causadas”.

Mérida, a 3 de noviembre de 2005.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ